

# El enorme reto de las autonomías

FT  
FINANCIAL  
TIMES

EDITORIAL

La caza del Rey Juan Carlos de un elefante en Botsuana pronto se convirtió en el tema de conversación en Madrid. Pero el verdadero tabú de la política española es qué puede hacer el Gobierno para contener el gasto de sus 17 autonomías.

Es un enorme reto. Desde que España aprobó su constitución democrática en 1978, los políticos de ambos bandos del espectro político han entregando progresivamente más poderes a las regiones. En la actualidad controlan buena parte del gasto público, incluidas áreas conflictivas desde el punto de vista político como la sanidad y la educación.

Sin embargo, la prudencia fiscal de las autonomías no se ha correspondido con su tamaño. Cuando en 2011 Madrid in-

cumplió el objetivo de déficit acordado con la UE en 2,5 puntos porcentuales, dos terceras partes de este déficit podían atribuirse a las regiones autónomas. Los cálculos independientes muestran que este año podrían emerger de nuevo déficits imprevistos.

Esto no debería preocupar a Madrid si las regiones tuvieran que asumir las consecuencias de sus propios actos. Pero no es el caso. Hace cuatro meses, el Gobierno central tuvo que pagar una factura de 123 millones de euros que Valencia debía a Deutsche Bank. Dado que Madrid cubre de facto la irresponsabilidad fiscal de las autonomías, su solvencia se ve afectada por el comportamiento de sus gobiernos regionales. Mariano Rajoy, el presidente del país, hace bien en tratar de ejercer un mayor control sobre ellas.

Aunque los principios de Rajoy son sensatos, puede que la ley que ha aprobado su Gobierno, y que exige a las autonomías eliminar sus déficit en 2020, no los ponga en práctica. A los políticos no les

costará mucho culpar de su generosidad con los gastos al ciclo económico.

Aparte de modificar sus leyes presupuestarias, el Gobierno debería adoptar otras dos iniciativas políticas. Primero, debería coordinar cambios en la financiación de la sanidad y la educación superior, de forma que pasen a depender en menor medida de las arcas públicas. La propuesta esta semana de exigir a los pacientes que paguen más por sus recetas representa un paso en la dirección adecuada. Segundo, Rajoy debería devolver algunos poderes al Gobierno central. Esto no implica que emprenda una agenda antifederalista. Sería una medida que provocaría la división política. Pero la centralización de aspectos del gasto público, como quiere hacer el Gobierno, extraerá un mayor rendimiento del dinero de los contribuyentes.

España ha ignorado durante demasiado tiempo el coste de su modelo federalista. La única forma de asegurar su supervivencia es replantearlo.